

JUZGADO CUARENTA DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

Ref.: 2022-00700

El proceso ejecutivo, dada su especial naturaleza, es una de las formas mediante las cuales se puede pedir la protección de los derechos, por parte el órgano jurisdiccional del Estado, y cuya característica esencial reside en la que debe existir certeza sobre el derecho sustancial que se pretende, a diferencia del proceso de conocimiento, que parte de la base de que el derecho se manifiesta como una incertidumbre y requiere por tanto la demostración de su existencia.

De allí que para la iniciación de un proceso ejecutivo debe existir la presencia de un título que debe ser suficiente para autorizarlo, esto es, que contenga todos los elementos indispensables para que pueda ser ejecutado judicialmente. Es por ello de vital importancia que el juez al examinar el título, exija que éste reúna las condiciones requeridas por las normas legales y las enseñanzas que otorgan la jurisprudencia y la doctrina.

El artículo 422 del Código General del Proceso, señala los requisitos que ha de tener el título ejecutivo, al decir que pueden demandarse ejecutivamente “***las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él***”. (Cursivas fuera de texto).

Descendiendo al estudio del caso particular, no cabe duda que la factura de venta No. 674398786-0 no cumple a cabalidad con los requisitos antes reseñados, necesarios para dotarla de “...*mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del Derecho Civil y Comercial...*”¹, pues si bien la misma incorpora la firma del representante legal de la empresa prestadora del servicio; su fecha de emisión (05 de abril de 2022); la información del cliente (MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RAMOS Y/O OTROS); el número de la cuenta o contrato (0030861-4); la clase del servicio (residencial); el costo de prestación del servicio por unidad (653.57); la determinación del consumo (137 Kw - lectura actual); el periodo de facturación (02/03/2022 - 31/03/2022); el valor total a pagar (\$4.597.800) y la fecha de pago oportuno (inmediato), nótese que la aludida factura no contiene una relación pormenorizada de los consumos objeto de cobro, que le permita al usuario

¹ Ley 142 de 1994, artículo 130, modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

comprender “...cómo se determinaron y valoraron sus consumos, cómo se comparan éstos y su precio con los de períodos anteriores...” (art. 148, Ley 142 de 1994), máxime si se tiene en cuenta que el valor a pagar corresponde al saldo de facturaciones o consumos anteriores aparentemente causados entre los meses de junio de 2016 y abril de 2022, como se infiere del documento que milita en el PDF 03, que no alcanza a suplir la referida omisión, pues no se encuentra acreditado que hiciera parte integral de la factura o que hubiere sido puesta en conocimiento de la ejecutada.

Por consiguiente, al no aportarse un título ejecutivo con la entidad suficiente para conseguir su coercitividad a través de esta cuerda procesal, el Juzgado resuelve:

Primero: Negar el mandamiento de pago por las razones expuestas en la parte motiva de este auto.

Segundo: Toda vez que la demanda se presentó por medios virtuales, no hay lugar a ordenar su devolución.

Tercero: Archívese el expediente, previas las constancias del caso.

Notifíquese,


HERNANDO SOTO MURCIA
Juez.

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020

JUZGADO CUARENTA DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MÚLTIPLE
Por anotación en el estado N° 026 de fecha 21 de junio de
2022 fue notificado el auto anterior. Fijado a las 8:00 am.
La secretaria_____